

El proceso de paz con las Farc y la cuestión rural en Antioquia*

Olga Roció Buitrago. B.**

Germán Darío Valencia A.***

—Introducción. —I. El conflicto interno armado y el sector rural en Colombia y Antioquia. —II. La cuestión rural en Antioquia (2000-2012). —III. Lo rural en las negociaciones de La Habana, Cuba. —IV. Lo rural más allá de lo agrario: elementos para el debate. —Referencias bibliográficas.

Primera versión recibida: Octubre 15 de 2012; versión final aceptada: Febrero 21 de 2013

Resumen: Antioquia es uno de los departamentos colombianos más afectados por el conflicto armado interno; el número de víctimas, por ejemplo, en junio de 2013 era de 1'050.593, provenientes, la mayoría, del sector rural. De allí el interés que se llegue a un acuerdo de paz en La Habana, Cuba. El artículo analiza el sector rural en Antioquia y lo compara con lo negociado con las Farc. Muestra la relación histórica entre el conflicto armado y el sector rural,

diagnostica la problemática socioeconómica actual del sector en el departamento, presenta los principales aspectos abordados en el primer punto de la agenda de paz y, finalmente, deja planteado para la discusión algunos asuntos que es necesario abordar en el desarrollo del sector rural en la región.

Palabras clave: Antioquia, Conflicto armado interno, Proceso de paz, Sector rural, Farc-ep.

* El artículo de investigación es producto del proyecto de Investigación: “Estrategia para la sostenibilidad de los grupos A y A1 para los años 2011-2012”, financiado por el Comité de Apoyo a la Investigación –CODI– de la Universidad de Antioquia y desarrollado por el grupo de investigación *Hegemonía, guerras y conflicto* del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad, con el cual se fomenta la investigación autónoma de los miembros del grupo. Algunas ideas aquí desarrolladas fueron presentadas en la ponencia “El sector rural antioqueño y el proceso de paz con las Farc”, en la 2ª Asamblea Campesina Metropolitana. “por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina. Jardín Botánico de Medellín, Salón Restrepo. Medellín, 13 de junio de 2013.

** Administradora de empresas, Especialista en Gerencias Social y Magister en Administración, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Asistente Técnica de Presidencia de la Fundación para el Progreso de Antioquia –Proantioquia–. Correo electrónico: olgabuitrago@yahoo.es

*** Economista, especialista en Gerencia Social y magíster en Ciencia Política, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Estudiante del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Titular del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y miembro de los grupos de investigación *Hegemonía, guerras y conflicto* y *Microeconomía aplicada* de la misma universidad. Correo electrónico: german.valencia@udea.edu.co y gdvalencia@yahoo.com

Abstract: Antioquia is one of Colombia's departments most affected by the internal armed conflict, the number of victims, for example, in June 2013 was 1'050.593, most of them coming from the rural sector. Hence the interest to reach a peace agreement in Havana, Cuba. The article analyzes the rural sector in Antioquia and compares it negotiated with the FARC. Displays the historical relationship between the armed conflict and the rural sector, current socioeconomic problems diagnosed in the department sector, presents the main issues raised in the first point of the agenda for peace and finally leaves for discussion raised some issues need to be addressed in the development of the rural sector in the region.

Key words: Antioquia, Internal armed conflict, the peace process, rural sector, FARC-EP

Résumé: Antioquia est un département de Colombie très touché par le conflit armé. En juin 2013, le nombre de victimes dans le département arrivaient à 1'050.593 personnes, la plupart d'entre elles habitants de la zone rurale, d'où l'intérêt de parvenir à un accord de paix avec les FARC à La Havane, Cuba. L'objectif de cet article est d'établir une comparaison entre le secteur rural d'Antioquia et les aspects qui ont déjà été négocié avec les FARC. Nous montrons quatre points. Premièrement, nous montrons l'évolution historique de la relation entre le conflit armé et le secteur rural. Deuxièmement, nous établissons un diagnostic concernant les problèmes socio-économiques actuels du secteur rural dans le département. Troisièmement, nous présentons les principaux thèmes abordés

dans le premier point de la feuille de route pour la paix et, finalement, nous soulevons quelques questions concernant le développement du secteur rural.

Mots-clés: Antioquia, conflit armé interne, processus de paix, secteur rural, FARC-EP.

Clasificación JEL: D63, D74, H56, N56, R58

Introducción

El 27 de agosto de 2012 el Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos informó a la opinión pública que se iniciaba de manera formal los diálogos de negociación de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep). Ese día dio a conocer el *Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera* (2012), con el cual se estableció una agenda de negociaciones y unas normas operativas para inicio del proceso. Fueron seis puntos los acordados, entre ellos, la discusión de una política de desarrollo agrario integral. Este tema apareció en la agenda como el primer punto, recordando con ello que el conflicto armado interno está íntimamente asociado a la cuestión rural en Colombia.

El origen de la guerrilla de las Farc se encuentra en el campo: nacen como autodefensa campesina, entre las décadas de 1940 y 1950, y su dinámica y crecimiento, entre 1964 y 2013, también está atada a lo rural (Medina C., 2007; Pizarro, 1991). De allí que esta organización haya presentado históricamente los problemas del sector rural como su bandera de lucha. Las rei-

vindicaciones sobre lo rural han servido para justificar el alzamiento en armas y legitimar la rebelión contra el Estado. Por ello, pensar en la posible firma de un acuerdo de paz y la dejación de las armas debe pasar necesariamente por discutir el tema rural.

En esta larga guerra librada por cerca de cinco décadas y en la cual han participado muchos actores¹, los costos económicos y sociales han sido incalculables. Desde antes de la época de la Violencia (1948) el campo ha sido azotado con un gran número de muertes y desplazados; y con ella una caída de la inversión, un aumento de la pobreza y una situación crítica, si se le compara con la dinámica urbana. Los efectos de la guerra han sido más fuertes en unas regiones que en otras; el departamento de Antioquia, por ejemplo, representa cerca del 20% de los desplazamientos del país (en junio de 2013 era de 1'050.593) (Hernandez, 2013). De allí también que una salida negociada al conflicto debe repensar, igualmente, la problemática rural de estas regiones.

El presente artículo presenta la cuestión rural en Antioquia, asociado al primer punto de la agenda que actualmente se discute con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. En la primera sección se muestra la relación histórica entre lo rural y el conflicto armado interno en Colombia y Antioquia, se evidencia cómo la guerra y el campesinado estuvieron unidos el siglo veinte y cómo una historia del conflicto es también una historia del sector rural.

En la segunda sección se presenta algunos problemas del sector rural en Antioquia en la última década: se hace una radiografía comparada entre lo rural y lo urbano a través de los indicadores sociales y económicos y se completa el diagnóstico con otros problemas a los que se enfrenta el sector. En la tercera sección se presenta los principales aspectos agendados en las negociaciones de La Habana y cuál ha sido su tratamiento (basado en los informes que salen de la Mesa de conversaciones). Finalmente se hace en la quinta sección una serie de comentarios a la forma como se viene abordando lo rural en la Mesa con las Farc, destacando los avances en el tema, pero también los vacíos que hay en el tratamiento de lo rural, pues lo rural va mucho más allá de lo agrario.

I. El conflicto interno armado y el sector rural en Colombia y Antioquia

La tradición académica sobre los estudios de paz es muy larga en el mundo (Valencia, Gutiérrez, & Johansson, 2012). Uno de los enfoques con mayor fuerza es el de la *Construcción de Paz*, este plantea que para alcanzar la paz y mantenerla se requiere considerar, entre otros aspectos, los factores que dieron origen a los conflictos (Rettberg, 2013). De allí que una tarea ineludible de los actores que tratan de negociar la paz es incluir en los diálogos políticos aquellos temas sustantivos que provocaron el surgimiento de esta confrontación. Atacar estos asuntos

1 Como los grupos insurgentes el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos de autodefensas como las Autodefensas Unidas de Colombia y actualmente las nuevas bandas criminales (Bacrin).

permite quitarle el sustento ideológico a la confrontación y dejar en el vacío cualquier justificación de la guerra.

En Colombia, el conflicto armado interno ha estado ligado íntimamente al tema rural: allí nació, creció y se desarrolló y allí se mantiene. Por eso, hablar de lo rural en el país es hablar también de la guerra. La génesis del actual conflicto se remonta a la década de 1940 (Guzmán, Borda, & Luna, 1962): al final de aquel decenio se inició el llamado período de la Violencia, donde liberales y conservadores se enfrentaron, dejando un trágico saldo de muertos y desplazados de sus tierras (Oquist, 1980). Explicándose, en buena parte, el origen de la confrontación la lucha por la tierra entre campesinos, colonos, terratenientes y hacendados.

A mediados de la década de 1930 se presentó en Colombia un proceso migratorio de la ciudad al campo. La crisis económica mundial provocó que muchos campesinos que se habían ido para la ciudad regresaran a sus tierras (Berry, 2001, pág. 29), pero encontraron que de éstas se habían apropiado los empresarios, terratenientes y hacendados. Como los campesinos habían madurado políticamente en las ciudades, debido a su historia de enfrentamientos sociales, volvieron al campo a reclamar las tierras, dando origen a una larga disputa por uso y propiedad de la tierra (Molano, 2013). Ortiz (1985) señala cómo origen de la violencia en Colombia lo rural: ante la precariedad del Estado en estas zonas, los campesinos se organizaron en autodefensas y buscaron proteger sus parcelas con las armas.

Una de las forma como el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo quiso atender el conflicto colectivo fue a través de la promulgación de la Ley 200 de 1936. Esta buscó “la abolición de los resguardos y la supresión de bienes de manos muertas a mediados del siglo XIX” (Medina M. , 1989, pág. 29). El gobierno pretendió entregar las tierras a quienes la trabajaran y no defender simplemente a quienes tuviera un título. Se intentó dar un giro jurídico a la propiedad privada de la tierra, atribuyéndole una función social. La lectura que hizo el campesinado fue que la tierra era suya, ya que ellos eran quienes trabajaban; lo cual significó una invasión de tierras y disputas entre hacendados y campesinos por la propiedad de terrenos. Los trabajadores querían la tierra y se armaron como autodefensas campesinas para protegerse de los hacendados y terratenientes.

Para Pécaut (2001) estas luchas agrarias, ocurridas entre 1925-1936, se convirtieron en los antecedente de la violencia que posteriormente ocurriría en Colombia: las autodefensas campesinas fueron resultados de estas luchas y sirvieron de base para las guerrillas de los años siguientes. Disputa entre liberales y conservadores, con claros tintes de guerra civil, que se extendió por más de dos décadas (1940-1960), y donde el tema rural, de defensa de títulos de tierra fue central. Así, según Medina (1989, pág. 25),

En las regiones que habían sido escenario de luchas agrarias en los años treinta, los terratenientes, en no pocos casos, vieron en la violencia la oportunidad de disputarle a los antiguos colonos, ahora pequeños propietarios, sus derechos conquistados. Eso resulta cierto para el sur y el oriente del Tolima y para la región de Sumapaz en

Cundinamarca. Es decir, las manifestaciones son diferentes según son diferentes las regiones. La lógica sin embargo es la misma: la Violencia como factor de acumulación capitalista.

Para la región andina, en donde se ubica el departamento de Antioquia, varios trabajos han intentado mostrar el asocio íntimo que ha existido entre la violencia y el sector rural. Arocha (1979), por ejemplo, analiza la violencia local en el municipio cafetero de Monteverde, Quindío, y evidencia la relación positiva entre el contexto físico rural y la violencia: las cifras que presenta muestra que la mayoría de los actores del conflicto en ese municipio eran trabajadores rurales sin tierra. Lo mismo hace Betancourt y García (1990) para el departamento del Valle del Cauca, muestran el asocio de la violencia de los años treinta al conflicto agrario, evidencian cómo la mayoría del conflicto se dio en zonas rurales (laderas montañosas) donde tenían su accionar las bandas criminales de los “pájaros” (violencia conservadora) que ejercían violencia contra los moradores del sector rural.

Otros trabajos como los de Sánchez y Meertens (1983) y Sánchez y Bakewell (1985) exploran el nacimiento y auge del bandolerismo en regiones como el Quindío y Tolima y muestran cómo entre 1958 y 1965 en la violencia de las regiones cafeteras intervienen, además de liberales y conservadores, hacendados, campesinos y gamonales. Incluso en análisis de más larga duración, como los de Gaitán (1995), al analizar la dinámica de la violencia entre 1946-1992, encuentra que en departamentos cafeteros como Tolima, Caldas y Antioquia, la violencia está asociada al

campo, particularmente a factores como el narcotráfico y el crecimiento de la guerrilla.

Particularmente para Antioquia, el trabajo doctoral de Roldán (2003) muestra cómo la violencia que sufre Antioquia entre 1946-1953 se da en su mayoría en el sector rural, específicamente por la debilidad institucional del Estado en estas zonas. Para los municipios del occidente antioqueño, como Urrao y Dabeiba, encontró que debido precisamente a lo montañoso y selvático de su geografía rural de la zona permitió la expansión de grupos guerrilleros. Pero sobre todo mostró cómo la confrontación pasó de ser un tema político, entre liberales y conservadores, a ser una lucha económica, de búsqueda de ganancia a través de la invasión de terrenos y expropiación de tierras y parcelas.

En este departamento, la violencia inicia siendo política pero pasa a ser económica. Se enfrentan hacendado y campesinos por la defensa de la tierra. Esto provocó la aparición de organizaciones armadas cada vez más sofisticadas, según Roldán (2003), un ejemplo es la “guerrilla de Pavón” que se convirtió en los cincuenta en uno de los grupos mejor organizados en Colombia, con accionar en Antioquia y Chocó. En síntesis, esta autora construye mapas de las subregiones antioqueñas más afectadas por la Violencia y encuentra que las regiones más apartadas, con gran presencia campesina, son las que más sufren la confrontación en el departamento.

De esta manera, Antioquia pasó de ser un departamento relativamente pacífico a uno de los más violentos del país. La tasa de homicidios arrancó en 6,2 hpcmh

en 1947, un año antes del magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán (el 9 de abril de 1948), y en menos de tres lustros experimentó un aumento de más del 200% (Tabla 1). Siendo el año más crítico 1952 con una cifra de 45,6 hpcmh y luego, aunque bajó, se mantuvo en un 38 por ciento; tasa, en todo caso, superior (tres veces) a la que se daba antes de iniciarse esta triste etapa de la historia política del departamento.

Tabla 1.

Antioquia: Tasa de homicidios por cada mil habitantes (hpcmh), 1946-1959

<i>Año</i>	<i>Tasa</i>	<i>Año</i>	<i>Tasa</i>
1946	8,7	1953	33,9
1947	6,2	1954	21,3
1948	8,8	1955	23,5
1949	14,5	1956	29,4
1950	25,8	1957	24,2
1951	25	1958	38,4
1952	45,6	1959	38,3

Fuente: Chacón, Mario y Fabio Sánchez. Polarización política y violencia durante “La Violencia” 1946-1963. Universidad de Los Andes. Agosto (2003)

Pero Antioquia no era la excepción, fue el reflejo de lo que pasaba en toda Colombia. El país generó durante este período un gran número de muertos y desplazamientos: según cálculos de Oquist (1980) fueron cerca de 190,000 muertos y más de dos millones de desplazados de sus tierras. Las armas sirvieron a los violentos para despojar y ampliar la frontera agrícola. Fue una ola de violencia que se detuvo un poco a mediados de la década de 1960. Así se sintetiza uno de los períodos de violencia

más fuertes del país, cuyo fin daría el inicio de otro, el cual aún no termina.

El período de la Violencia finaliza con las negociaciones del poder entre liberales y conservadores. Estos dos partidos políticos dieron origen al Frente Nacional (1958-1974), los dos decidieron alternarse en el poder y repartirse los cargos públicos. Dado que el sector rural continuaba siendo un problema, en 1961 se realizó una importante reforma agraria a través de la Ley 135. El Estado generó una serie de estímulos económicos para apoyar el campo como inversiones en distritos de riego, obras de infraestructura vial y créditos a los propietarios de tierra. Esta Ley dio origen al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y buscó un aumento de la productividad del campo y una titulación de terrenos baldíos (Melo, 1995).

Pero ni los recursos ni las reformas institucionales tuvieron el efecto deseado. Las inversiones en el campo provocaron una valorización de las tierras y con ello un intento de los hacendados, empresarios y terratenientes (liberales y conservadores) de apropiarse de más terreno. La forma como lograron su objetivo fue con la firma del Pacto de Chicoral, en 1972, con el cual se buscó que se permitiera en Colombia ampliar la concentración de las tierras, se le quitó el límite de las 2.000 hectáreas a la propiedad y se dio un giro a la redistribución de la tierra que buscaba el campesinado (Melo, 1995). Así se echaron abajo las reformas a la tierra realizadas con las leyes 200 de 1936 y 135 de 1961 y se dejó “en pie la concentración de la propiedad territorial, y con ella una numerosa población agraria

con muy poca tierra o desprovista de ella” (Medina M. , 1989, pág. 29).

Adicionalmente, la población rural no pudo ser absorbida por otros sectores modernos del campo como la agricultura y la ganadería, se mantuvo la presión sobre la frontera agraria y se profundizaron los conflictos nuevamente en el campo colombiano. De nuevo, terratenientes, ganaderos y colonos se enfrentaron; ejemplo de ello se tiene en las regiones del “Tequendama en Cundinamarca; Sumapaz en el mismo Departamento; oriente del Tolima y sur del mismo Departamento; norte de Cundinamarca; Magdalena Medio; vastas regiones del Meta y del Caquetá” (pág. 29). Gran parte del territorio colombiano entro de nuevo en conflicto.

Pero esta vez se complejizó aún más la situación. Entraron en escena varios de los grupos armados que hasta ese momento eran marginados o inexistentes en el escenario público. Por ejemplo, hubo un rebrote de la insurgencia (Farc, EPL y ELN) que buscando apoyo popular intensificó su accionar en defensa de la tierra de los campesino y colonos; también aparecieron nuevas autodefensas campesinas, en este caso apoyas por terratenientes y empresarios que quería armarse para defender los latifundios y los derechos de propiedad adquiridos. Fue una nueva colonización violenta realizada en territorios como Chocó, Cauca, Córdoba y el Piedemonte Llanero. Allí de nuevo operó una ampliación de la frontera agrícola.

Esta nueva colonización coincide con el nacimiento y expansión de narcotráfico. Las nuevas tierras colonizadas se convirtieron

en espacios para los cultivos ilícitos de la marihuana y la cocaína (Medina M. , 1989). De allí que se hable de una dinámica rural caracterizada por la colonización de tierras y la ganaderización. La lógica comienza con la búsqueda de nuevas tierras por parte de campesinos colonizadores; luego llegan los comerciantes y ganaderos comprando esta tierra; y más atrás los empresarios ilegales buscando tierras para el cultivo de coca (Molano, 2013). Esta lógica ayudó a construir una guerrilla y un campesinado próspero atado a la tierra y los cultivos ilícitos; pero también una dinámica que activa más el conflicto por la tierra y donde las armas se convierten en un instrumento de protección y expansión.

En Antioquia el conflicto armado ha afectado a todas las subregiones. Algunas de ellas como por ejemplo la subregión Nordeste, han sido lugares con presencia guerrillera desde hace muchas décadas; esta subregión fue lugar de origen de frentes guerrilleros del ELN, luego le tocó vivir el accionar de las estructuras paramilitares, y en la actualidad, después de los procesos de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC finalizados en 2006, de nuevo tienen presencia guerrillera, pero ahora de las Farc. Esta zona ilustra claramente la dinámica del conflicto en el departamento: primero se da una presencia muy fuerte de la subversión hasta la década de 1990, luego coexisten hasta 2000 grupos guerrilleros y paramilitares, con un fuerte dominio de las AUC hasta 2003, y finalmente se da un reacomodo de la guerrilla hasta hoy.

En término de grupos armados, al finalizar la década de 1990 las Farc hacían presencia en cinco de las nueve subregiones, a través

de seis frentes (el 5 y 58 en el Urabá, el 18 y 36 en el Bajo Cauca, el 47 en Suroeste y Oriente Antioqueño y el 9 en el Valle de Aburrá, Comuna 13 de Medellín). Algo similar ocurría con el ELN quien hacía presencia en las subregiones del Nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca y milicias en Medellín. Pero a partir de 1997 se presenta un debilitamiento de estas dos agrupaciones, debido básicamente a la presión paramilitar, en subregiones como el Magdalena Medio y el Urabá; hasta lograr en 2001 haber superado la presencia paramilitar a la guerrillera en número de municipios. Sin embargo, en 2003 de nuevo se invierte esta proporción y la guerrilla pasa de hacer presencia del 14% en 2000 a 25% en 2007 (Ávila, 2008).

Como advierte el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe General de Memoria y Conflicto (2013, pág. 19):

La violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto de la sociedad colombiana. Los impactos son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. [...] Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y

familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático.

El informe confirma que en Colombia “entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos”² (Bello, 2013, pág. 20). Entre los casos que más han llamado la atención al Centro de Memoria Histórica fue el ocurrido en el municipio de San Carlos, Antioquia, donde se combinaron todas las formas de violencia: “masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, secuestros, ataques a poblaciones, minas antipersonal, bloqueos económicos y sabotajes) que produjo el destierro masivo de sus habitantes” (pág. 21).

Igualmente han advertido el fuerte vínculo que hay entre los temas rurales clásico de apropiación, uso y tenencia de la tierra con el conflicto armado como motores de su origen y perduración. En varias regiones de Colombia muestran cómo hay persistentes, dinámicos e históricos procesos de despojo, apropiación violenta de tierras, concentración ociosa de la misma, usos inadecuados, colonizaciones y titulaciones fallidas. A estos viejos problemas se le unen los nuevos o más recientes como “el narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales

2 El Informe calcula que “De estas muertes el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes; es decir que aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles, y que, por lo tanto, son ellos —personas no combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario— los más afectados por la violencia (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág. 32).

económicas y empresariales, y narcotraficantes” (Bello, 2013, pág. 21).

En conclusión, como se afirma en el Informe del Centro de Memoria Histórica, esta mirada de la violencia desde lo rural, desde la perspectiva de la tierra y del territorio muestra otra cara de la historia del país y, para este artículo, del departamento de Antioquia:

La guerra se ha librado mayoritariamente en el campo colombiano, en los caseríos, veredas y municipios, lejanos y apartados del país central o de las grandes ciudades. Es una guerra que muchos colombianos y colombianas no ven, no sienten, una guerra que no los amenaza. Una guerra de la que se tiene noticia a través del lente de los medios de comunicación, que sufren otros y que permite a miles de personas vivir en la ilusión de que el país goza de democracia plena y prosperidad, a la vez que les impide entender la suma importancia de cada decisión, afirmación o negociación política para quienes la sufren. Quienes viven lejos de los campos donde se realizan las acciones de los armados ignoran que, por ejemplo, un acuerdo que pacte un cese al fuego representa para esos campesinos y campesinas la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir (Bello, 2013, pág. 22).

II. La cuestión rural en Antioquia (2000-2012)

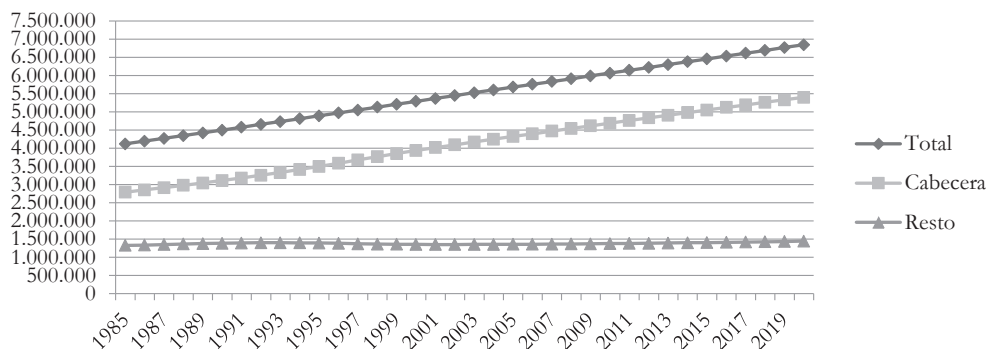
Dado que la guerra se ha hecho en el campo, también ha sido el sector rural el más afectado por el conflicto. Los costos económicos y sociales los han asumido en

su mayoría los campesinos. El resultado es una población rural—según los indicadores tradicionales de desarrollo— empobrecida y atrasada si se compara con la dinámica urbana. En lo social, por ejemplo, presenta una menor tasa de crecimiento, un mayor analfabetismo y una cobertura en educación y salud inferior; y en lo económico, caídas altísimas en la producción y el empleo, y atrasos en las exportaciones, la competitividad y el desarrollo. El propósito de esta segunda sección es hacer una presentación general de la problemática social y económica del sector rural en Antioquia, destacando algunos de los asuntos más críticos que debe atender.

a. Problemática social

Antioquia si se mira en términos demográficos es un departamento urbano: el 77,7% de los habitantes se ubica en las cabeceras (un poco más que el total de la población colombiana (76%)) (Dane 2012). En contraste se encuentra una población rural que pierde importancia: en 2012 las proyecciones estimaban era de 1.387.743 habitantes rurales, cifra muy similar a la presentada diez años atrás (1.354.307 en 2003), pero inferior en términos porcentuales, si se le compara con el total departamental de las últimas décadas (Gráfica 1). Esta reducción porcentual es explicada por la caída de su participación en las subregiones más pobladas (Valle de Aburrá, Occidente, Oriente y Suroeste) y los crecimientos leves en otras subregiones (exceptuando el Bajo Cauca donde el crecimiento es alto) (Tabla 2).

Gráfico 1
Antioquia: crecimiento de la población estimada, 1985-2020



Fuente: Construcción propia con base en Dane (2007).

Tabla 2
Antioquia: tasas de crecimiento intercensal rural (1993-2005) y población rural estimada (2005-2012)

Subregión	Tasa de crecimiento intercensal rural 1993-2005	Población rural conciliada 2005	Población rural estimada (a junio 30) 2012
Valle de Aburrá	2,74	180.815	179.274
Bajo Cauca	2,24	101.101	112.462
Magdalena Medio	0,41	41.057	43.118
Nordeste	-0,31	88.018	91.203
Norte	-1,01	135.094	136.464
Occidente	-1,41	134.332	129.718
Oriente	-2,06	253.371	248.117
Suroeste	-1,96	202.291	193.996
Urabá	0,97	222.162	253.391
Total departamento	-0,27	1.358.241	1.387.743

Fuente: Construcción propia con base en datos de Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia 2011.

Las condiciones de vida en que vive la población rural en el departamento son críticas, si se le compara con la urbana. Por ejemplo, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 2011 se situó en 47,48, muy superior a la urbana. Además, se caracteriza el departamento porque esta tasa se comienza a elevar a

medida que se distancia la subregión de la del Valle de Aburrá: así la subregión más cercana como lo es el Oriente su índice de NBI fue de 27,6 en 2011, mientras la de Urabá se situaba en 64,5 para el mismo año (Tabla 3). Un comportamiento similar ocurre entre las subregiones si se mira a través de otros indicadores: la Miseria Es-

tructural, que es un índice que mide aquellos hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas, muestra cómo en Oriente este índice es de 2,4% mientras que Urabá lo tiene en 29%.³

En general, la situación social del sector rural del departamento de Antioquia es desfavorable, si se le compara con la urbana. Los indicadores de los servicios públicos también así lo evidencian: la cobertura en agua potable del sector rural es del 84%, en

acueducto del 42,4% y en saneamiento del 67,6%; y la conducta en disparidades subregionales se mantiene: las subregiones con mayor población sin acceso a los servicios públicos domiciliarios son el Nordeste con un porcentaje del 47,7% y el Bajo Cauca con 18,4 (Tabla 3). En educación la tasa de analfabetismo, en población mayor de 15 años, en el sector rural es del 8,7%, frente a una de las cabeceras del 3,4%; manteniéndose la disparidad regional: Urabá 13,9% frente a Oriente menos al 6,0%.

Tabla 3.
Antioquia. Indicadores de Calidad de Vida y de Condiciones de Vida en el sector rural (2011)

Indicadores	Sector Rural									
	Total Depto.	Valle de Aburrá	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá
PHNBI (1)		14,0	58,7	34,8	59,8	47,8	34,6	27,6	41,8	64,5
PHVI (2)		0,9	18,5	8,2	10,7	6,3	4,8	0,8	3,3	44,9
PSSP (3)		5,5	18,4	20,7	47,7	33,8	23,5	18,6	33,3	33,8
PHHC (4)		1,9	7,4	4,8	5,8	6,8	4,4	2,7	3,0	11,0
PHAUE (5)		1,0	2,8	2,1	1,5	1,6	2,3	1,1	1,8	2,3
PHADE (6)		6,7	7,2	5,6	9,0	10,4	6,3	7,1	6,0	8,3
PHMISERIA (7)		1,7	15,7	5,8	12,7	9,4	6,0	2,4	5,1	29,1
ICV (8)	55,8	70,7	47,2	56,1	50,2	51,4	52,4	57,3	52,3	41,9
IMCV (9)	30,72	38,77	25,51	28,54	28,82	27,43	29,33	30,13	30,66	23,36

Fuente: Construcción propia con base en Encuesta de Calidad de Vida y principales indicadores 2011. Gobernación de Antioquia

3 En Antioquia también se viene calculando la situación socioeconómica a través de otros indicadores, otro de ellos es el de condiciones de vida, que utiliza cinco dimensiones diferentes (calidad de la vivienda y equipamiento, acceso a servicios públicos, capital humano y escolarización, aspectos demográficos y seguridad social en salud y empleo), para 2011 la zona rural presentaba en un porcentaje de hogares rurales del 55,8%; además se constata nuevamente la disparidad subregional: Urabá con un 41,9% frente a Oriente con un mejor índice de 57,3% (Tabla 3).

(1) Porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI): La metodología general incluye 5 factores determinantes de pobreza así: a) Vivienda inadecuada en términos de los materiales de construcción, b) Falta de acceso a Servicios públicos con agua, Alcantarillado, c) Alta densidad de ocupación de vivienda sobrepasando el límite de 3 personas por Cuarto, d) Niños en edad escolar sin cobertura educativa (7-11 años), e) Alto nivel de dependencia sobrepasando el límite de 3 personas por persona ocupada y el jefe con escolaridad inferior a tres años. Un hogar presenta una necesidad básica insatisfecha cuando adolece de alguno de los 5 factores.

(2) Porcentaje de hogares en viviendas inadecuadas: Se considera que un hogar habita en Vivienda inadecuada cuando adolece de las siguientes características: (Hogares en viviendas móviles, refugios naturales o sin paredes. urbanas: viviendas con piso de tierra o material en paredes de bahareque sin revocar, guadua, caña o madera burda. Zona rural: viviendas con piso de tierra y material en paredes de bahareque sin revocar, guadua, caña o madera burda.

(3) Porcentaje de hogares en viviendas sin servicios públicos: Hogares en viviendas sin conexión a servicios públicos de acueducto o alcantarillado en el área urbana, Hogares sin conexión a servicios públicos de acueducto, alcantarillado o pozo séptico en el área rural.

(4) Porcentaje de hogares en viviendas con hacinamiento crítico Hogares con hacinamiento crítico (Más de tres personas por cuarto).

(5) Porcentaje de hogares con Ausentismo escolar: Hogares con al menos un niño entre 7 y 11 años, pariente del jefe de hogar que no asiste a un centro de educación formal.

(6) Porcentaje de hogares con alta dependencia económica: Más de tres personas por miembro ocupado y el jefe con escolaridad inferior a tres años.

(7) Porcentaje de hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas: La metodología general incluye 5 factores determinantes de pobreza así: a) Vivienda inadecuada en términos de los materiales de construcción, b) Falta de acceso a Servicios públicos con agua, Alcantarillado, c) Alta densidad de ocupación de vivienda sobrepasando el límite de

3 personas por Cuarto, d) Niños en edad escolar sin cobertura educativa (7-11 años), e) Alto nivel de dependencia sobrepasando el límite de 3 personas por persona ocupada y el jefe con escolaridad inferior a tres años. Un hogar se encuentra en MISERIA cuando adolece de dos o más necesidades básicas anteriores.

(8) Índice de Condiciones de Vida: Son un resumen de diferentes características relacionadas con la vivienda, aspectos demográficos de las personas que componen el hogar, el acceso a los servicios públicos, y el capital humano y la seguridad social del hogar. El indicador asigna a cada hogar un puntaje varía entre cero y cien: A medida que el valor del índice aumenta, las condiciones de vida del hogar mejoran. Utiliza 16 variables.

(9) Índice Multidimensional de Condiciones de Vida: Son un resumen de diferentes características relacionadas con la vivienda, aspectos demográficos de las personas que componen el hogar, el acceso a los servicios públicos, y el capital humano y la seguridad social del hogar. El indicador asigna a cada hogar un puntaje varía entre cero y cien: A medida que el valor del índice aumenta, las condiciones de vida del hogar mejoran. Utiliza 42 variables.

b. Problemática económica

Una primera problemática económica del sector rural en Antioquia es la clara reducción de su participación en el PIB. Esto ocurre tanto en país como en el departamento: de una participación superior al 40% a mediados del siglo XX, el país pasó a principios del siglo XXI a representar solo el 8,3% (en 2001) y a caer aún más en 2010 al 6,5%. Algo similar ocurre en Antioquia quien presenció una caída de la participación del sector primario en el PIB: en 2000 era de 8,2% y en 2011 fue del 6,9%. Entre los subsectores que han contribuido más a esta caída está la actividad cafetera; en el departamento este producto pasó de contribuir el 7,2%

en 2001 a un 5,8% en 2010 (Cano, Mejía, García, & Calderón, 2012).⁴

Otro de los problemas del sector rural está en el uso del suelo frente a la aptitud. De total de tierras del departamento, calculado en 2007 en 6.250.000 has (Instituto Geográfico Agustín Codazzi (-IGAC-); Gobernación de Antioquia, IDEA, 2007), cuya aptitud era para: agricultura 676.000 has. (10,8% del territorio), ganadería 867.000 has. (13,8%), agroforestal 2.352.000 has (37,6%), forestal 1.725.000 has. (27,6%), conservación 595.000 has (9,5%) y otros fines 35.000 has. (0,7%); sin embargo se ha encontrado que el uso es muy distinto. La ganadería, por ejemplo, ocupa 2.700.000 has; tres veces más de lo apto para esta actividad, lo mismo pasa con la minería, en especial con la ilegal e informal, que entra en conflicto con los usos agropecuarios,

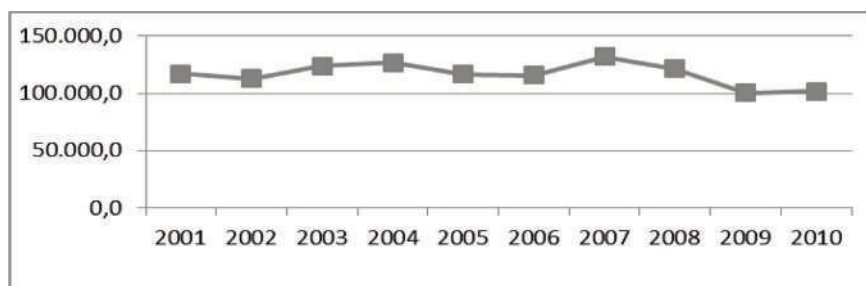
los daños ambientales permanentes y las burbujas especulativas que desestimulan las actividades agropecuarias.⁵

En cuanto a las tierras para a la agricultura, actualmente se utilizan cerca de 483.000 has., distribuidas 79% en cultivos y el restante en transitorios. Estos últimos han presentado en la última década (2001-2010) una pérdida de cerca de 15.000 has. (Grafica 2), especialmente en maíz (quien representa el 76% de la reducción), frijol y papa. Pérdida que ha sido ganada por los cultivos permanentes como las plantaciones forestales (con 62.000 hectáreas), el caucho, aguacate, cacao, cítricos y plátano (cultivos que representan el 60% del aumento). En total, se ha presentado un aumento neto cercano a las 113.000 has para el mismo periodo (Gráfica 3).

4 Según el Banco de la República la pérdida del sector caficultor colombiano obedece principalmente a la caída dramática de su productividad y no a los fenómenos de cambio climático y/o las fluctuaciones de los precios internacionales; igualmente hay una responsabilidad en el envejecimiento de las plantaciones y la menos fertilización. La productividad ha caído en un 40%, pasó de 14,4 sacos (de 60 kilos)/hectárea en 2007 a 8,5 sacos/hectárea en 2010.

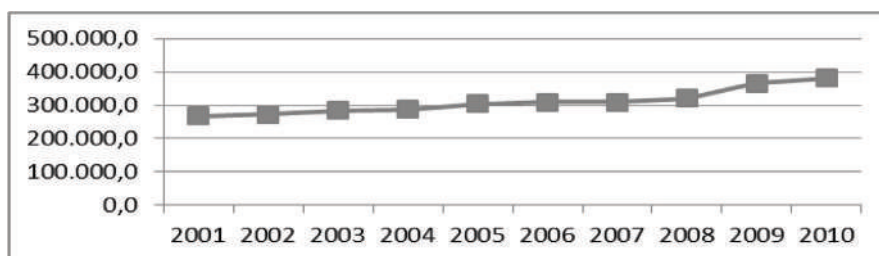
5 Hay que advertir que persisten muchas diferencias entre la información reportada sobre el uso del suelo en Antioquia. Una es la información que reporta el Dane a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria y otra la que presenta la Gobernación de Antioquia en el Anuario Estadístico del Sector Agropecuario; por ejemplo, para 2012 el Dane dice que el área en uso agrícola representan el 7%, mientras para la Gobernación es el 14,83%; los pastos representan para el primero el 58% de uso y para el segundo el 31,32%; bosques, 16% para el primero y 42,67% para el segundo. Independientemente de estas cifras, el mayor uso del suelo para pastos sigue siendo tema de controversia y ello, sumado a la actividad minera, a las zonas de reserva campesina que se discuten en la Habana, a las tierras de la Altillanura, al proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, generan mayor conflicto por el uso del suelo.

Gráfica 2
Antioquia: Área Sembrada (has) -Cultivos Transitorios 2001-2010



Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 2011.

Gráfica 3
Antioquia: Área Sembrada (has) -Cultivos Permanentes 2001- 2010



Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 2011.

En contraste con lo agrícola, la actividad pecuaria en Antioquia aumentó: entre 2001 y 2010 se registra un incremento de 380 mil bovinos (el inventario ganadero de pasó de 2.228 mil cabezas a 2.617 mil). De esta manera, según Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA- 2011, el departamento se ubicó en el primer lugar del escalafón colombiano en inventario ganadero y en producción de leche. La distribución de esta producción en Antioquia es: un 47% para carne, 37% tiene doble propósito y un 16% para leche. Esta última creció entre 2001 y 2009 más de 950 mil litros/día; incremento

que, como se dijo, se debe al aumento de 450 mil has. del departamento en pastos.

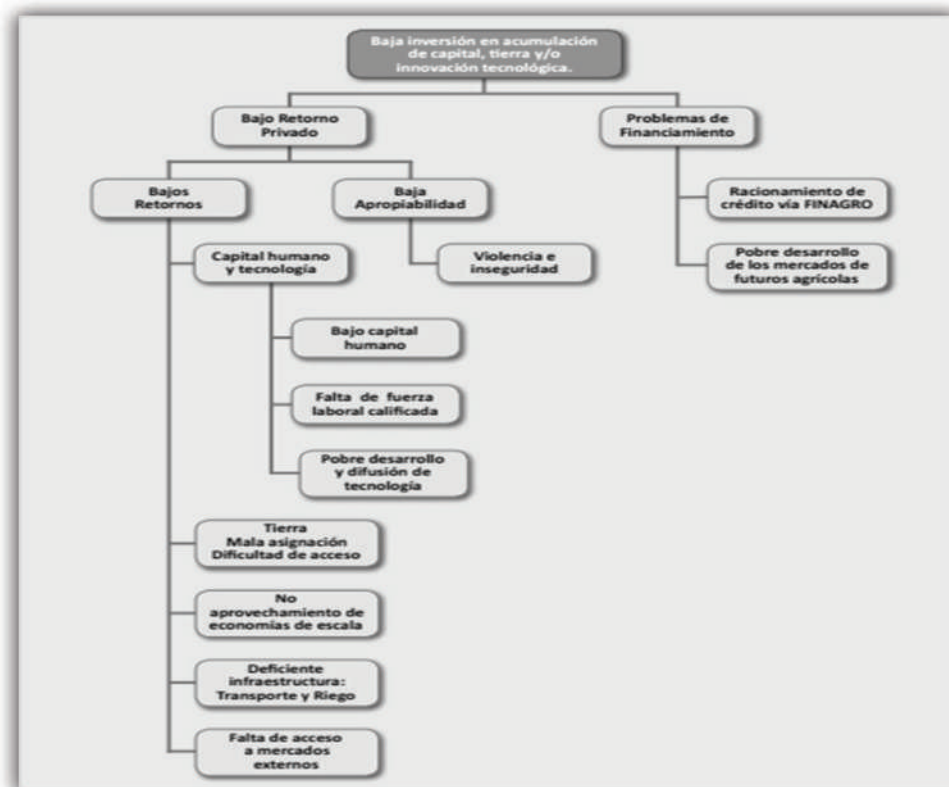
Finalmente se destaca la problemática agroexportadora. Las exportaciones del sector agrícola del departamento registraron una caída de más de 10 punto porcentuales en menos de una década: en 2005 del total de las exportaciones del departamento éste representaba el 25,3% y en 2013 cayó al 14,4% (Cámara de Comercio de Antioquia, 2013). Adicionalmente se mantiene la participación de los productos de los sectores tradicionales: el banano con 52%, el café con 29% y las flores con 17%.

C. Otros temas críticos del sector rural en Antioquia

A la anterior problemática del sector rural en Antioquia se le unen otros identificados por otros estudios. Por ejemplo, el Consejo Privado de Competitividad (2009) identificó bajo el enfoque de Hausmann o de “cuellos de botella al crecimiento” varios factores que explican el pobre desempeño de lo rural colombiano (Gráfica 4). Estos problemas, en su mayoría, también están

presentes en el sector rural de Antioquia: hay baja formación de capital humano, falta fuerza laboral calificada, se tiene poca tecnificación de la producción y el escaso acceso a mercados externos. Además se reconocen otros problemas históricos como la desigual distribución de la tierra y el acceso a la misma, deficiencias en la infraestructura, el reducido aprovechamiento de las economías de escala, la baja apropiabilidad y los problemas de financiamiento.

Gráfica 4.
Colombia: Árbol de problemas del sector agropecuario



Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2009, pág. 151)

De manera específica otros estudios para el sector rural en Antioquia identifican los siguientes problemas:

A. Alta concentración y tenencia de la tierra: La concentración de la tierra en el departamento, medido a través del Gini, desde 2006 y hasta 2011, supera el 0.8, tanto del Gini en tierra como por propietarios y hogares, solo separando las tierras por calidad el índice baja levemente (0.78) (Tabla 4) (Muñoz & Zapata, 2011). De estas, los predios privados con destino económico agropecuario concentran el 77.97% del área

de terreno, el cual “se caracteriza por el predominio de la mediana y gran propiedad, a pesar de que el 57.42% de los propietarios son microfundistas y el 19.5% minifundistas” (2011, pág. 15). Adicionalmente, se presenta un problema con la tenencia (poseedores y los ocupantes): “[...] la informalidad en la posesión de la tierra, llega a representar más de tres cuartas partes de los predios en subregiones como el Magdalena Medio y más de la mitad en Urabá, creando limitaciones en materia de acceso al crédito y fomentando la siembra de cultivos ilícitos” (Tabla 5).

Tabla 4.

Antioquia: Gini de tierras (con y sin corrección por calidad), propietarios y hogares (sin repetición, y con y sin corrección por calidad), 2006-2011

Año	Gini tierra	Gini tierra (calidad)	Gini propietarios (sr)	Gini propietarios (sr y calidad)	Gini hogares (sr)	Gini hogares (sr y calidad)
2006	0.81329	0.78168	0.83928	0.81164	0.85250	0.82714
2007	0.81193	0.77841	0.83898	0.80942	0.85421	0.82745
2008	0.81148	0.78031	0.84062	0.81305	0.85376	0.82846
2009	0.81009	0.77775	0.84096	0.81258	0.85246	0.82613
2010	0.80818	0.77546	0.84035	0.81196	0.85030	0.82369
2011	0.80833	0.77554	0.84055	0.81204	0.85041	0.82367

Fuente: (Muñoz & Zapata, 2011, pág. 50).

Tabla 5.

Antioquia: Tenencia de la tierra rural, según área que ocupan y número de predios registrados, 2011

SEGÚN AREA QUE OCUPAN									
General	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburra
Propietario	71,71%	61,45%	79,03%	67,57%	63,49%	66,89%	91,52%	67,33%	94,57%
Ocupantes	23,69%	37,58%	19,51%	30,90%	34,23%	31,89%	7,99%	31,46%	4,42%
Poseedores	1,60%	0,97%	1,46%	1,57%	2,28%	1,12%	0,49%	1,20%	1,02%
SEGÚN NUMERO PREDIOS REGISTRADOS									
General	Bajo Cauca	Magdalena Medio	Nordeste	Norte	Occidente	Oriente	Suroeste	Urabá	Valle de Aburra
Propietario	49,33%	23,47%	61,78%	63,74%	57,53%	67,93%	75,09%	39,34%	69,40%
Ocupantes	48,98%	74,77%	36,07%	35,01%	40,42%	30,84%	23,16%	59,22%	29,08%
Poseedores	1,69%	1,76%	2,15%	1,25%	2,05%	1,23%	1,74%	1,43%	1,52%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. En: Plan de Gobierno Antioquia la más educada 2011-2015.

- b. Conflictos y violencia:** El anterior fenómeno ha contribuido en el departamento a que se genere una profundización en los conflictos regionales, asociados, fundamentalmente, por la ampliación de la frontera pecuaria y a las actividades ilegales e informales mineras y forestales. La violencia y la inseguridad se han extendido por el departamento. Además de los grupos armados tradicionales, hacen presencia en el departamento las nuevas Bandas Criminales (Bacrim); la Gobernación de Antioquia ha identificado en 43 municipios la presencia estas organizaciones asociadas la producción de cultivos ilícitos. Además otras subregiones como el Valle de Aburra, Norte, Nordeste y Bajo Cauca se ven afectadas por haberse convertido en rutas del narcotráfico.⁶
- c. Escasa infraestructura de transporte y logística.** La infraestructura vial de Antioquia están en mal estado⁷, no existe un red férrea, la navegación fluvial es reducida, los aeropuertos están en mal estado y la inversiones bajas (esta dependen directamente de los muni-

cipios, especialmente los municipios de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y Turbo); finalmente, el puerto de Urabá, el proyecto más importante de infraestructura portuaria, sigue en estudios y análisis.

- d. Falta financiamiento:** Las condiciones críticas de los pequeños productores agropecuarios manifiestas en los bajos niveles de capitalización, el tamaño de los predios, los niveles de calificación del recurso humano, la carencia de asistencia técnica, la incertidumbre del mercado y el riesgo climático, entre otros, generan un alto riesgo para el sistema financiero. El resultado es una baja cobertura de crédito para estos productores desde la banca privada; el escaso financiamiento del sector rural está en el sector público, vía Finagro, cuyos recursos aumentaron entre 2010 y 2011 en un 30,9%.⁸ Antioquia posee una importante participación en el otorgamiento de los créditos agropecuarios del total nacional (12,8%) procedentes de esta línea; aumentando su participación con respecto a 2010 en un 48,4%.

6 Uno de los efectos económicos que tiene la violencia y la criminalidad es la baja apropiabilidad, que según el Consejo Privado de Competitividad (2009, pág. 19), se convierte en uno “los factores que impiden que una actividad productiva con un buen retorno a la inversión, sea apropiada por los inversionistas”.

7 De acuerdo con información del departamento, de los 1.494 km. en vías primarias, sólo 84 km. son dobles calzadas; de 4.822,7 km. de red vial secundaria solo 1.416 km. están pavimentados; y de éstos el 83% se encuentra en regular o mal estado; y de los 13779,2 km. de red vial terciaria, aproximadamente el 70% se encuentra en mal estado. Además, un gran número de puentes (96) requieren de atención inmediata.

8 El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) otorgó créditos por \$5.5 billones, con un crecimiento de 30.87% respecto a 2010; de este monto, el 27.00% correspondió a créditos dirigidos a pequeños productores. Por línea, el 60.72% estuvo dirigido a inversiones, 28.71% a capital de trabajo y 10.57% a normalización de cartera. El Banco Agrario fue el de mayor participación en la gestión de préstamos con recursos de esta entidad (42.82%) proporcionando nueva financiación por valor de \$2.3 billones, 12.35% superior al registrado en 2010 (Banco Agrario de Colombia, 2012).

e. **Desaprovechamiento de economías de escala:** A pesar de que Antioquia participa en más de 12 cadenas productivas, solo tres están activas (frijol, aguacate y fique); además las 41 Acuerdos de Alianzas Productivas se tienen focalizadas en 16 productos en 38 municipios. Esta situación hace advertir a la Gobernación de Antioquia que en el departamento no se aprovechan economías de escala: “el número de organizaciones agroempresariales formalizadas de pequeños y medianos productores es muy reducido y su capacidad de gestión es muy limitada y el número de asociados representa una mínima proporción de los productores del Departamento” (Gobernación de Antioquia, 2012, pág. 5.15).⁹

f. **Poca diversidad exportadora:** Como se advirtió el sector exportador antioqueño se concentra en banano, café y flores. Se encuentran pocos esfuerzos por cambiar esta situación; los protocolos sanitarios y fitosanitarios para exportación que son un instrumento para facilitar el acceso a los mercados externos como instrumento de esta política, el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA– (2010) encontró que de los 81 protocolos para exportación e importación acordados con 19 países, solo 28 de estos productos muestran dinámica exportadora, el resto aún no reporta actividad exportadora. Un dato preocupante en relación con el acceso: el

50% de productos alimenticios exportados a Estados Unidos se devuelven por problemas de etiquetado. Antioquia aún no hace un uso sistemático de las oportunidades derivadas de los protocolos de acceso.

g. **Cambio climático:** Finalmente cabe resaltar que un factor de reciente preocupación y que afecta la inversión en el campo es el cambio climático. Las “olas invernales”, sumadas al deterioro de las cuencas hidrográficas, están afectando de manera importante al sector rural. Los cultivos más vulnerables han sido: arroz secano, tomate de árbol, trigo y papa. El exceso de humedad afectó el café no resistente a la roya, con consecuencias para el departamento. Antioquia ha perdido cerca de 43.000 has por inundación y deslizamiento. Sin embargo el país aún no cuenta con sólidas instituciones para el manejo de la investigación y la gestión asociada al cambio climático.

En general, el sector rural en Antioquia tiene una serie de problemas muy diversos, los cuales están presente en todas las subregiones. El problema del conflicto y la violencia es uno de ellos y tal vez es el más importante para la economía, pues aleja los inversionistas, destruye la infraestructura y debilita el capital humano y social. De allí que la esperanza en reducir la violencia a través de un proceso de paz es tan bien acogida entre toda la población. Sin embargo se debe ser consciente que firmar

9 Según la Secretaria de Agricultura de Antioquia, existen 394 asociaciones que agrupan 13.581 productores. Oriente, Occidente y Urabá son las subregiones en donde se concentran el mayor número de organizaciones de productores agropecuarios del Departamento (243) y de asociados (9056) (Gobernación de Antioquia, 2012).

la desmovilización con la subversión es solo una etapa en la construcción de la paz; solo se atendería uno de los muchos problemas que sufre la ruralidad.

Como lo advierte Absalón Machado (2013) —quien dirigió el reciente informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) para Colombia y el cual fue dedicado a la ruralidad— la problemática del sector rural es una red densa y compleja, la cual puede agruparse en cinco grandes nodos: 1) el *Problema agrario*, que gira entorno a las tierras y en donde están los problemas de inequidad en el acceso a la propiedad, uso del suelo, impuestos prediales, inversión extranjera, informalidad de la propiedad, baldíos, catastro y registro y las zonas de reserva campesina, etc.; 2) el *Problema de productividad*, que se asocia a la adopción de tecnologías, infraestructura, competitividad, economía campesina, seguridad alimentaria, políticas públicas en subsidios y apoyos al sector, etc.); 3) el *Desarrollo rural*, en el que están los temas de acceso a bienes públicos, inequidad, pobreza, conflictos sociales, desarrollo institucional y el medio ambiente, etc. 4) el *Conflicto armado interno*, en el que se agrupa a la violencia, el desplazamiento forzado, masacres, atentados, secuestros, violación de los derechos humanos, narcotráfico y minería ilegal, etc. y 5) finalmente están los *conflictos por la modernización* allí están las tensiones de los biocombustibles *vs* la seguridad alimentaria, minería *vs* medio ambiente, agricultura extensiva *vs* la intensiva y megaproyectos *vs* comunidades afectadas, además de los tratados de libre comercio, entre otros temas. En síntesis, lo rural va más allá del conflicto de tierras como mucho piensan.

III. Lo rural en las negociaciones de La Habana, Cuba

Dada la multidimensionalidad que tiene la cuestión rural en Colombia y Antioquia, el gobierno nacional y regional en las últimas tres décadas ha tratado por varios frentes de hacerle frente a su problemática sectorial. Una de las formas adoptadas fue hacer reformas institucionales, por ejemplo la Ley 60 de 1994 o Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; intentó cambiar la planificación de la redistribución de la tierra y el desarrollo de la economía campesina colombiana; para ello se reestructuró la tenencia de la tierra, se diseñó e implementó programas de dotación de tierras a desposeídos, se intentó poner en funcionamiento un mercado de tierras donde se diera una negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, y además se otorgaron nuevos subsidios. Pero de nuevo...

[...] los resultados no fueron alentadores debido a factores como la asimetría entre los propietarios y el campesinado, los costos de la tierra definidos en avalúos comerciales y la injerencia de presiones políticas y económicas en el ámbito local. Además, la precariedad de la oferta de créditos y de asistencia técnica, así como los efectos de la apertura económica, agravaron la situación de los campesinos endeudados con el subsidio, lo que condujo a que muchos malvendieran sus predios (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág. 152).

Otra estrategia con la que el gobierno ha buscado atenuar los problemas del sector rural y con ellos de toda la sociedad colombiana ha sido la reducción de la violencia en el campo. Desde 1981 y hasta la fecha (2013) las dos maneras exploradas han

sido: la tradicional, de controlar el orden público mediante el uso legítimo de las armas; y la de pactar políticamente la dejación de armas. Con el actual proceso que se tiene en La Habana, Cuba, son cuatro las ocasiones que el Gobierno ha buscado la desmovilización de las Farc (en los gobiernos de Betancur, Gaviria, Pastrana y Santos). En los cuatro procesos de paz ha quedado claro la importancia que tiene para ambas partes el tema rural. Las Farc siempre han defendido el origen campesino de su lucha. Defienden la relación íntima entre el conflicto armado y el tema agrario. De allí que el primer punto de la agenda en La Habana no sea gratuito y el tema del desarrollo agrario sea el esperado se negocie en primer lugar.

En este último proceso, el cual se inició el 17 de noviembre de 2012 con la instalación de la Mesa de conversaciones en La Habana, Cuba, el primer punto acordado en discutir fue la “Política de desarrollo agrario integral”. Las partes firmantes del *Acuerdo General*... coincidieron en advertir que se requiere construir una política de desarrollo agrario integral “para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” (2013, pág. 1). Por ello incluyeron seis grandes subtemas en la agenda:

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial
3. Infraestructura y adecuación de tierras
4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
6. Sistema de seguridad alimentaria.

En este temario se sintetizan, según las partes, los temas donde las Farc tienen intereses prioritarios. Entre estos cabe destacar como punto fundamental: las Zonas de Reserva Campesina. En estas confluyen los históricos problemas de acceso, tenencia y uso a la tierra, calidad de la misma, redistribución de la propiedad y autonomía administrativa y política. En síntesis, en La Habana se está negociando uno de los conflictos históricos de Colombia, que es la cuestión rural.

Después de siete meses (del 15 de noviembre de 2012 hasta el 15 junio de 2013) el Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones (2013) informó que el tema agrario había concluido. Se ha llegado a un primer acuerdo titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral” que hará parte de Acuerdo Final, advirtiendo que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Este primer acuerdo se caracteriza por hacer un giro importante de una *Política* a una *Reforma* y de considerar solo lo *agrario* a avanzar hacia lo *Rural*. Con esta reforma se busca iniciar las “transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera” (2013, pág. 8).

La lectura del *Primer informe conjunto* evidencia el objetivo que tienen las partes de mejorar el bienestar social, integrar a las regiones, erradicar la pobreza, promover la igualdad y cerrar la brecha campo-ciudad. Una propuesta que está dirigida a atender toda la población que vive en la ruralidad (gente del campo, comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, además de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales). En síntesis, es una reforma que busca ampliar los derechos ciudadanos, proteger los existentes y mejorar “la economía campesina, familiar y comunitaria” (2013, pág. 9).

Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. “Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural” (2013, pág. 8). De manera resumida los puntos que aparecen en el informe conjunto apuntan a:

- a. *Democratizar el acceso a la tierra.* Permitir que los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y que las comunidades rurales afectadas por el conflicto tengan posibilidad de acceder a la tierra a través de un Fondo de Tierras de distribución gratuita.
- b. *Acceso integral a la tierra:* además de acceso a la tierra se busca apoyar a los campesinos para el uso adecuado de esta a través de capital semilla, riego, asistencia técnica, vivienda y crédito. También de la infraestructura en bienes y servicios públicos como vías, salud, educación y agua potable.
- c. *Formalización de la propiedad rural:* se buscará que las personas que accedan a la tierra o la posean formalicen la pequeña y mediana propiedad, con el fin de que la ley proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. En este sentido también se ha acordado crear una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales.
- d. *Actualización catastral:* se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades. Así mismo se buscará implementar un sistema de cobro y recaudo del predial, bajo los principios de equidad y la justicia social.
- e. *Uso del suelo:* Se definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales; también se creará incentivos para promover la reconversión productiva y se delimitará la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal.
- f. *Zonas de Reserva Campesina:* Se buscará implementar los planes de desarrollo de estas zonas (las constituidas y de las que se constituyan) y se promoverá la

- participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.
- g. *Desarrollo de la infraestructura*: Se planea reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos.
- h. *Apoyo a la comercialización*: El Estado brindará programas institucionales y de estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción. Esto implicará “apoyo a la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades” (2013, pág. 12).
- i. *Asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación*: el preacuerdo busca estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Por ejemplo, a través de protección de las semillas nativas y los bancos de semillas.
- j. *Apoyo financiero*: Con líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.
- k. *Inversión social*: En salud se acordó un nuevo modelo especial que atienda las zonas rurales. En educación brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales; así mismo, promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo. Además se buscará fortalecer y promover la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc. Finalmente, se buscará mejorar las condiciones de las viviendas, el agua y el saneamiento básico en los rurales.
- l. *Seguridad social*: Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios.

En síntesis, la Reforma Rural Integral a la que llegaron las partes en La Habana busca atender muchos de los problemas diagnosticados en el sector rural, como los que señala Machado (2013). Pero se hace especial énfasis a la protección de la economía campesina, familiar y comunitaria; es decir, atiende a los tres primeros problemas que Machado señala tiene el sector rural. El problema agrario, de productividad y de desarrollo rural. Se busca atacar la pobreza

rural y la desigualdad, y también le apuntan a disminuir la brecha entre el campo y la ciudad, que como se ejemplificó con Antioquia estas brechas son abismales. Es un programa ambicioso pero considerado por como poco revolucionario si se considera que muchas de estas propuestas ya se venían trabajando en Colombia desde hace varias décadas (Melo, 1995).

IV. Lo rural más allá de los agrario: elementos para el debate

Se puede considerar como afortunado para el sector rural el giro que ha tenido los diálogos de negociación con las Farc en La Habana. Se comenzó hablando, en septiembre de 2012, de una *Política agraria integral* y ha finalizado, por ahora, con una *Reforma Rural Integral*; es decir, se transformó la pretensión de pensar en un remedio puntual para el campo a través de una política pública a una gran transformación de lo rural, que incluya acciones concretas de corto, mediano y largo plazo, pero también un giro en la postura frente a la ruralidad en Colombia.

Es giro se debe en buena parte a que se ha retomado los avances que durante las últimas décadas se ha dado, tanto en Colombia como en el mundo sobre la ruralidad. En el Informe de Desarrollo Humano del PNUD para Colombia de 2011 se adoptó una definición de lo rural que va más allá de lo agropecuario. Lo rural se pensó como:

La complejidad de las relaciones entre: *el territorio*, como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de intercambios e identidades políticas y culturales; *la población*, que vive

vinculada a los recursos naturales y la tierra y que comparte un cierto modelo cultural; *los asentamientos*, que establecen relaciones entre sí mismos y con el exterior a través del intercambio de personas, mercancías e información; y *las instituciones públicas y privadas*, que confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema” (Pérez, 2001) citado por Pnud, 2011, p. 13).

Además, el informe ha servido para llamar la atención sobre el subdimensionamiento en que se tiene al sector rural en el país, insiste que “Colombia es más rural de lo que pensamos [...] no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayor parte del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales” (2011, p. 13). De allí que sea necesario pensar en una reforma rural integral que erradique los factores estructurales que causan la pobreza, la miseria y la desigualdad en este sector. Como lo dice el PNUD ((2011, pág. 18) se debe dar un giro al orden social y político injusto y excluyente, abrir el camino para que el sector salga de su atraso relativo y avance por la senda del desarrollo económico y social. Una reforma que atienda esta buena parte de la población que se encuentra atrasada y abandonada si se le compara con lo rural.

Hay que reconocer que los primeros acuerdos parciales con las Farc muestran avances frente a lo rural; también se nota un esfuerzo del Gobierno Nacional por elaborar una política rural transformadora, que busca cambiar la actual estructura de tenencia de la tierra, que piensa la ruralidad en función del territorio, que atiende a los más desfavorecidos en la escala social y que

le apunta a un cambio de modelo económico. Pero hay que decir que el desarrollo rural va más allá de estos esfuerzos, el PNUD (2011) y Machado (2013) son enfáticos en evidenciar que la cuestión rural va más allá del clásico problema agrario, hay que trabajar de manera integral el desarrollo rural, en los problemas de productividad, de los conflictos y de otros asuntos poco tratados como las tensiones que crea la modernización del campo.

Específicamente para Antioquia una comparación entre las acciones realizadas y la situación del sector rural evidencian vacíos y plantean retos. Del Gobierno Nacional se espera que trabaje en: 1) alcanzar las metas de la Política Integral de Tierras y el Programa Desarrollo Rural con Equidad -DRE-; 2) apoyar financiera e institucionalmente al campo, por ejemplo, a través de Corpoica; 3) apoyar sectores específicos que presenta caídas dramáticas en la producción, como el sector cafetero; y 4) darle mayor importancia a los conglomerados productivos, estimulando la creación de territorios en los cuales se desarrollan estructuras productivas con prevalencia de acción conjunta y trabajo asociado, entre otros asuntos.

En cuanto a las responsabilidades desde la Gobernación de Antioquia, hay que resaltar el esfuerzo del actual Plan de Desarrollo *Antioquia la más educada 2012-2015* en términos de fortalecimiento del sector educativo y también en la implementación de programas como la Política de Tierras, Alianzas Productivas, cofinanciación de Garantías para el acceso de pequeños y medianos productores a proyectos agroindustriales. Pero debe seguir insistiendo

en atender otras dimensiones de la precarización y vulnerabilidad del sector rural como son: apoyar financieramente más al sector agropecuario, crear estímulos para que se acerquen las aptitud del suelo con su uso, apoyos específicos a cultivos afectados por diversos motivos y que pierden participación (caso maíz, frijol y papa), ampliar la oferta de productos exportables (por ejemplo, tomate de mesa, caucho y tabaco), mejorar los paquetes tecnológicos (en panela, hortalizas, frutales, cuero, fique y forestales nativos), reducir la informalidad en la tenencia de la tierra para aumentar el acceso al crédito, aprovechar las economías de escala y aumentar los productos exportables.

Se tendría un gran avance en el sector rural en Colombia y en Antioquia donde se lograra pactar la paz con las Farc en esta cuarta ocasión. Este sector sería el más beneficiado con un eventual acuerdo de paz. Cómo se mostró, el departamento sufre hoy los efectos del conflicto armado, pero este conflicto no es el único, hay luchas por la apropiación de la tierra, su uso y propiedad. El Estado tiene gran responsabilidad en esta situación de allí que sea necesario que trabaje en una institucionalidad que haga presencia en el sector rural, que tenga en cuenta las reales dimensiones del sector, que logre modernizar el campo y ataque de manera sistemática los diversos conflictos. Firmar la paz y mantenerla no es solo una responsabilidad de los actores del conflicto, es necesario que toda la sociedad trabaje en resolver una diversidad amplia de problemas del sector rural, el cual ha sufrido el olvido y abandono de todos. Lo rural

debe ser un compromiso de los sectores, en especial de los urbanos.

Todos deben trabajar para reconstruir los destrozos que ha provocado el conflicto armado en más de 50 años. Hay que desatracarse de las reformas que era necesario aplicar. Diseñar e implementar políticas de largo plazo, cambios de énfasis. Construir

un modelo de desarrollo rural que atienda la problemática de manera integral, con desarrollo humano. Una política de Estado de desarrollo rural propio. Una política que permita incorporar lo rural a la modernización. Firmar la paz es una condición necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo rural.

Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ, P. (2012). *Mercado De Tierras En Colombia: ¿Acaparamiento o soberanía alimentaria?* Cartilla. Buga: Instituto Mayor Campesino (IMCA).
- AROCHA, J. (1979). *La Violencia en el Quindío: Determinantes ecológicos y económicos del homicidio en un municipio caficultor*. Bogotá: Tercer Mundo.
- ÁVILA, A. (2008). Contexto de violencia y conflicto armado. En C. López, *Monografía Política Electoral Departamento de Antioquia 1997-2007*. Bogotá: Misión de Observación Electoral.
- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. (2012). *Informe de gestión 2011*. Bogotá: Banco Agrario de Colombia.
- BELLO, M. (2013). Presentación. En Centro de Memoria Histórica, *¡Basta ya!* (págs. 19-28). Bogotá: Centro de Memoria Histórica.
- BERRY, A. (2001). “¿Colombia encontró por fin una Reforma Agraria que funcione? *Revista de Economía Institucional*, 4(6), 24-70.
- BETANCOURT, D., & GARCÍA, M. (1990). *Matones y Cuadrilleros: Orígenes y evolución de la Violencia en el occidente colombiano, 1946-1965*. Bogotá: Tercer Mundo.
- CÁMARA DE COMERCIO DE ANTIOQUIA. (2013). Obtenido de <http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2013/Sector%20privado%20impulsa%20economia%20regional.pdf>
- CANO, C. G., MEJÍA, C. V., GARCÍA, E. C., & CALDERÓN, J. S. (2012). El mercado mundial del café y su impacto en Colombia. *Borradores de Economía* (710), 56 p.
- CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. (2013). *¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Centro de Memoria Histórica. Obtenido de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html#sthash.4IWv3hMY.dpuf>
- CHACÓN, M., & SÁNCHEZ, F. (2003). *Polarización política y violencia durante “La Violencia” 1946-1963*. Bogotá: Universidad de Los Andes. Obtenido de economia.uniandes.edu.co/content/download/11690/.../mario_chacon.pdf

- CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. (2009). *Competitividad del sector agropecuario en Colombia*. Obtenido de [http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/informes/2008-2009/Agropecuario-\(agricultura\).pdf](http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/informes/2008-2009/Agropecuario-(agricultura).pdf): <http://www.compitem.com.co/site/>
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE). (SEPTIEMBRE DE 2007). *Proyecciones de población 2005-2020*. Obtenido de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf: <http://www.dane.gov.co>
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) . (2010). *Reflexiones sobre el desarrollo de Antioquia- Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos"* . Bogotá: Departamento Nacional de Planeación (DNP) .
- GAITÁN, F. (1995). Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia. En D. Malcom, & F. Gaitán, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (2012). *Anuario Estadístico de Antioquia*. Obtenido de http://antioquia.gov.co/Anuario_Encuesta_2011/anuario_web/: <http://antioquia.gov.co>
- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (2012). *Plan de Desarrollo 2012-2015 Antioquia la mas educada. Medellín:Gobernación de Antioquia.*
- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (2012). *Plan de Desarrollo de Antioquia la mas Educada 2012-2015. Medellín: Gobernación de Antioquia.*
- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (NOVIEMBRE DE 2012). *Anuario Estadístico Agropecuario y pesquero 2011*. Obtenido de www.antioquia.gov.co/antioquia.../Anuario%20en%20CD%202009/inde.: www.antioquia.gov.co
- GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA EJERCITO DEL PUEBLO. (2012). *Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Obtenido de Ideas para la paz: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/09/Acuerdo-general-para-la-terminaci%C3%B3n-del-conflicto-y-la-construcci%C3%B3n-de-una-paz-estable-y-duradera1.pdf>
- GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA- EJERCITO DEL PUEBLO, F-E. (2013). *Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP*. La Habana. Recuperado el 21 de Junio de 2013, de <http://www.eltiempo.com/politica/ARCHIVO/ARCHIVO-12887284-0.pdf>
- GUZMÁN, G., BORDA, O. F., & LUNA, E. U. (1962). *La Violencia en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
- HERNANDEZ, C. (21 DE JUNIO DE 2013). *Ley de víctimas: Antioquia necesita más seguridad y más restitución*. (I. P. Capacitación, Editor) Obtenido de Agencia de prensa IPC: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ley-de-victimas-antioquia-necesita-mas-seguridad-y-mas-restitucion&catid=83:general&Itemid=197
- INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA- . (2010). *Análisis y comportamiento de los protocolos sanitarios y fitosanitarios de exportación*. Bogotá: Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-.

- INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC); Gobernación de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. (2007). *Características geográficas*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Bogotá.
- MACHADO, A. (31 DE JULIO DE 2013). El agro y el posconflicto en Colombia. Medellín, Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia.
- MEDINA, C. (2007). *FARC-EP. Notas para una historia política 1958-2006*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia.
- MEDINA, M. (ENERO-JUNIO DE 1989). Bases urbanas de la violencia en Colombia. *Historia Crítica*(1), 20-32.
- MELO, J. (1995). *Colombia Hoy: Perspectivas para el siglo XXI*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- MOLANO, A. (2013). Foro Cuestión agraria y desarrollo rural en Colombia: a propósito de la negociación en La Habana [Grabado por G. Valencia]. [Gravación]. Medellín, Antioquia, Colombia: U. d. Antioquia.
- MUÑOZ, C., & ZAPATA, O. (2011). *Estructura de la propiedad de la tierra rural en Antioquia, 2006-2011*. Obtenido de <http://www.antioquia.gov.co/catastro/Estructura%20de%20la%20propiedad%20de%20la%20tierra%20rural%20en%20Antioquia,%202006-2011.pdf>: <http://www.antioquia.gov.co/>
- Oquist, P. (1980). *Violence, Conflict, and Politics in Colombia*. New York: Academic Press.
- Ortiz, C. M. (1985). *Estado y Subversión en Colombia. La Violencia en el Quindío Años 50*. Bogotá: CIDER Universidad de los Andes.
- Pécaut, D. (2001). *Orden y violencia: evolución socio-política entre 1930 y 1953*. Bogotá: Norma.
- Pérez, E. (2001). (2001). "Hacia una nueva visión de lo rural". En: Giarracca, N. (comp.). *Una nueva ruralidad en América Latina*. Buenos Aires:: Clacso, Colección grupos de trabajo.
- Pizarro, E. (1991). *Las FARC (1949-1966): De las Autodefensas a la combinación de todas las formas de lucha*. Santafé de Bogotá: IEPRI- Tercer Mundo Editores.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2011). *Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza*. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
- Rettberg, A. (2013). La construcción de paz bajo la lupa: una revisión de la actividad y de la literatura académica internacional. *Estudios Políticos*(42), 13-36.
- Roldán, M. (2003). *A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología Historia - Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.
- Sánchez, G., & Bakewell, M. (Noviembre de 1985). La Violencia in Colombia: New Research, New Questions. *The Hispanic American Historical Review*, 65(4), 789-807.

- Sánchez, G., & Meertens, D. (1983). *Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la Violencia en Colombia*. Bogotá: El Ancora.
- Tovar, J., & Uribe, E. (2008). *Reflexiones sobre el crecimiento de largo plazo del sector agrícola en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico.
- Universidad EAFIT. (2001). *La otra Antioquia: desigualdad e informalidad rural y problemas conexos*. Medellín: Universidad Eafit.
- UNIVERSIDAD EAFIT Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (2011). *Estructura de la propiedad de la tierra rural en Antioquia, 2006-2011*. Medellín: Secretaria de Agricultura de Antioquia.
- VALENCIA, G., GUTIÉRREZ, A., & JOHANSSON, S. (2012). Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la resolución negociada. *Estudios Políticos*(40), 149-174.